

No. 510
2da. Semana
Agosto 2017
Año: XI
Cuarta Época

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE

Nuestro
TIEMPO

UNA PUBLICACIÓN DE NOLOGO GRUPO S.A. DE C.V.



Toluca y sus 65 delitos diarios



nologo

Selene Hernández León
Fundadora

Miguel Ángel Alvarado López
Director General

Mercadotecnia y suscripciones
Juan Manuel Hernández León

LDG. Fabiola Díaz Rosales
OM DISEÑO

Luis Enrique Sepulveda
Ilustración

Fotografía
Lluvia Ácida

Direcciones electrónicas
nuestro_tiempo2003@hotmail.com
nologo_news@hotmail.com
ventasnologo@hotmail.com

nuestrotempotoluca.wordpress.com
www.nuestrotempotoluca.com.mx

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO

Año X
No. 510
Segunda Semana de Agosto del 2017
Es una publicación semanal editada por:
Nologo Grupo, S.A. de C.V.

Avenida Eulalia Peñaloza 132,
Col. Federal, CP 50120,
Toluca, Estado de México.
Tel: 197 74 23 y 2 1775 43.

Editor responsable: Miguel Ángel Alvarado López. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-060614490300-101, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN en Trámite. Impresa por Miguel Fermin Pulido Gómez en Metepec, Estado de México, en el Barrio de San Mateo Abajo calle Mariano Matamoros 10, CP. 52140. Tel. 232 7144. Este número se terminó de imprimir el 15 de Agosto del 2017 con un tiraje de 5 mil ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.



@Nuestro_Tiempo

EN PORTADA

Crédito/ Miguel Alvarado.

Suscripción

FOLIO

POR UN AÑO: \$520.00 M.N
SEIS MESES: \$260.00 M.N

FECHA DE INICIO DE SUSCRIPCIÓN:

FINAL DE SUSCRIPCIÓN:

A NOMBRE DE:

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

CALLE:

COLONIA:

MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

SEMANARIO NUESTRO TIEMPO
EULALIA PEÑALOZA 132, COL. FEDERAL, TOLUCA, MÉX.

TEL.: 01722-197•74•23/ 044722•590 67 69

Juan Manuel Hernández / Ventas

R
E
S
S
O
D



Félix Santana

De enero a junio del 2017, en la capital mexicana, se han registrado casi 11 mil 800 delitos, cuatro mil delitos más de lo reportado en el mismo periodo, en el 2016.

De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en su diagnóstico sobre Seguridad Pública de Toluca, en los últimos seis meses, se registraron 6 secuestros, 34 homicidios, 86 delitos sexuales, mil 30 delitos patrimoniales y extorsiones, dos mil 80 lesiones, dos mil 94 robos de autos, a casas habitación, negocios y transeúntes. En promedio, se cometen 65 delitos diarios, mientras que en el año 2016 se registraron 19 mil 248 delitos.

Estos datos corresponden únicamente a lo reportado ante las autoridades, sin embargo, para la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que el INEGI dio a conocer en septiembre de 2016, existe un subregistro de delitos no denunciados, denominado "cifra negra", que corresponde al 95.4 por ciento. Sólo el 4.6 por

Toluca y sus 65 delitos diarios

** En 6 meses ya suman 244 mil delitos; tres de cada 10 toluqueños son agredidos, aunque no todos denuncian. Si se considera que cada policía percibe 11 mil pesos mensuales, el costo por la seguridad pública sería poco más de 28 millones de pesos al mes. Actualmente, la administración municipal del PRI gasta más de 2 mil millones de pesos en servicios personales cada año.*

ciento de los delitos ocurridos se convierten en averiguaciones previas ante el Ministerio Público.

Esto significaría que, en realidad, se cometieron 244 mil delitos que no iniciaron averiguación previa: tres de cada 10 toluqueños sufrieron algún tipo de delito.

“Según el INEGI, las razones para no denunciar, son la ineficacia y desconfianza en la autoridad, las amenazas por parte del agresor, temor a represalias, trámites engorrosos y difíciles; y en el algunos casos porque la familia no quiso”, dice el académico Fermín Carreño, integrante de la plataforma ciudadana En Toluca Sí Podemos.

No se denuncian el 83 por ciento de las extorsiones, el 71 por ciento de las violaciones, el 67 por ciento de los secuestros, 55 por ciento de lesiones, 54 por ciento de los robos a casa, 51 por ciento de robo a negocios y 9 por ciento referente a robo de vehículos, son denunciadas. Así, por cada extorsión denunciada, en realidad hubo seis. Por cada violación denunciada se presentaron de tres a cuatro y por

cada secuestro en realidad hubo tres.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC) se recomienda, en promedio, la necesidad de 3 policías por cada mil habitantes.

De acuerdo con estándares Internacionales, “los gobiernos municipales del PRI y del PAN en Toluca, no han tenido el talento o la voluntad para resolver esta grave situación de seguridad pública, ya que existe un déficit de elementos policíacos”.

En Toluca, el número de policías es insuficiente. Se requieren al menos 2 mil 623 policías y sólo se tienen mil 394 registrados, de los cuales sólo uno cuenta con maestría, 113 tienen licenciatura, 723 bachillerato, 439 secundaria, 44 carrera técnica, 17 con primaria y 2 no tienen estudios.

El parque vehicular del ayuntamiento es de 310 unidades y está conformado por 136 patrullas, 114 camionetas, 37 motocicletas, 21 cuatrimotos, una grúa, un autobús y 22 módulos de vigilancia concentrados en el Centro Histórico, en las colonias San Lorenzo Te-

paltitlán, Seminario, San Sebastián, Morelos, Nueva Oxtotitlán, La Maquinita, Santa Ana Tlapaltitlán, Capultitlán, CU, Cerrillo y Calixtlahuaca.

Si se considera que cada policía percibe 11 mil pesos mensuales, el costo por la seguridad pública sería poco más de 28 millones de pesos al mes. Actualmente, la administración municipal del PRI gasta más de 2 mil millones de pesos en servicios personales cada año.

Es necesario crear un programa integral de seguridad humana que tenga como objetivo principal la reconstrucción del tejido social y sea el combate y persecución del delito una tarea complementaria. Además, el próximo director de Seguridad Ciudadana de Toluca debe contar con un perfil intachable, vocación de servicio y experiencia en el área, evitando a toda costa nombrar a personajes de cuestionable reputación como el ex subdirector de la Política Criminal de Toluca, Germán Reyes Murguía, “El M1”, acusado de operador de la Familia Michoacana y presuntamente responsable de 25 homicidios y “administrar” una fosa clandestina con cinco osamentas, en el municipio de Almoloya de Juárez. **NT**

Seis años de oscuridad



* Si hoy tenemos 60 por ciento de pobres, en 6 años se incrementarán a 80 por ciento. Si hoy somos la entidad más violenta, la intervención de las fuerzas armadas federales será parte del escenario común para controlar el descontento social y no a la criminalidad.



Félix Santana

Toluca, México; 10 de agosto del 2017. Para el Grupo Atlacomulco, el Estado de México representa un botín de más de 260 mil millones de pesos al año. Su estilo de gobernar ha combinado la política y los negocios, convirtiendo al patrimonio público en algo personal. Así lo hacen desde el asesinato del gobernador mexiquense Alfredo Zárate Albarrán, en 1942, cuando Isidro Fabela asumió la gubernatura y Alfredo del Mazo Vélez (abuelo del gobernador electo), como tesorero, corrompió con 3 mil pesos a los presidentes municipales y 10 mil pesos a los diputados locales para aceptar al nuevo gobernador, aunque no cumpliera con ningún requisito constitucional.

Setenta y cinco años después, “las Instituciones” guardianes de la democracia mexicana, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó en un escuálido y opaco boletín que su Sala Regional de Toluca concluyó el recuento de 556 casillas, sin dar a conocer los resultados de dicha revisión y, con ello, consumir el fraude institucional que ninguna autoridad electoral quiso ver.

Si Alfredo del Mazo Maza asume la gubernatura mexiquense será difícil ocultar la debilidad política y electoral del PRI, pues Morena obtuvo 65 mil 797 votos más que el partido

oficial, lo que significa que Morena es la primera fuerza política en el Estado de México. Y es que la izquierda, en su conjunto, alcanzó casi 3 millones de votos, es decir, un millón más que el PRI y sus aliados.

De los 17 millones de mexiquenses, sólo el 11.8 por ciento votaron por Del Mazo, lo que significa que 15 millones de personas rechazaron su imposición y, como resultado, el 60 por ciento de la población sabe que su elección fue fraudulenta, con al menos 601 delitos electorales documentados que van desde rebase de los topes de gastos de campaña, intervención gubernamental, compra de votos, terrorismo psicológico, amenazas, levantones, narcomantas, cabezas de cerdos. Toda esa suciedad difícilmente podrá olvidarse en el corto plazo.

El eventual gobierno de Alfredo no será diferente a su trayectoria, por ejemplo, en 2001, cuando trabajó como funcionario de Petróleos Mexicanos recibió ilegalmente beneficios por más de 252 mil pesos y una beca para estudiar un posgrado en la Universidad de Harvard sin contar con los requisitos de ley. Cuando fue director de Banobras, de 2012 a 2015, gastó 2 mil 605 millones de pesos en fiestas del día de Muertos, árboles de Navidad, viajes en avión, clases de boliche, yoga, ajedrez y tenis y com-

pra de playeras de la selección mexicana, es decir, frivolidades.

La entrega discrecional de contratos a sus amigos y socios será continuación de lo que ya ha hecho, por ejemplo, haber pagado 67 millones 518 mil pesos por su transportación aérea como director de Banobras a Eolo Plus, filial del Grupo Higa, la empresa involucrada en la construcción de la Casa Blanca de la esposa de Enrique Peña; y otorgar cuatro contratos por 283.3 millones de pesos al ex gobernador de Chihuahua, el hoy prófugo César Duarte Jaques.

La bonanza de las finanzas estatales no detendrán la violencia, corrupción, inseguridad y pobreza en la que vive más de la mitad de la población del Estado de México, porque el Grupo Atlacomulco -del que forma parte Alfredo del Mazo- asume el patrimonio público como riqueza personal. Si hoy tenemos 60 por ciento de pobres, en 6 años se incrementarán a 80 por ciento. Si hoy somos la entidad más violenta, la intervención de las fuerzas armadas federales será parte del escenario común para controlar el descontento social y no a la criminalidad. El autoritarismo y prepotencia del gobierno aumentarán por su falta de legitimidad, una larga noche de seis años nos espera a los mexiquenses. **NT**

Los operadores de Plaza Toluca

** Papá Gordo tenía veinticinco operadores en la Plaza Toluca, “trabajando todos y cada uno de nosotros en vehículos robados, proporcionados por Comandante Enero y Presidente Clinton”. Y El Cóndor confesó un salario quincenal de ocho mil pesos cuando ascendió de jefe de informantes a cobrador de las rentas en las tiendas de droga alineadas a la empresa, “que por lo regular eran de veinticinco mil pesos a la semana y de diez mil pesos semanales para los narcomenudistas móviles”.*

Francisco Cruz Jiménez

Era una casa cualquiera: entrando, dos cuartos al lado derecho, un patio grande y al fondo la casa principal que se compone, en el primer piso, de sala comedor, baño y una recámara, así como una pequeña chimenea junto a las escaleras de caracol que llegan al segundo piso, en donde hay dos recámaras, un hall para televisión y un balcón. En la parte posterior, dos cuartos medio empezados de tabicón. La casa se ubica en una calle cerrada de terracería.

Llegaron por la avenida Las Torres, con dirección a la Ciudad de México, hasta la avenida Asunción, donde dieron vuelta hacia al sur hasta llegar al domicilio, cerca del Conalep. Allí pasaron la noche. Al día siguiente, cada uno —excepto Cañas y Kalín, quienes se quedaron por órdenes superiores— tomó rumbo diferente. Regresaron tres días después para enterarse de las novedades y del éxito del operativo. La prensa local había destacado la ejecución de Nico y algunos reporteros

incluso supieron lo de la cartulina con el mensaje de La Familia.

Conocida la preparación y capacidad de El Cóndor, un soldado entrenado por la Fuerza Aérea Mexicana para descifrar los mensajes y las claves de las organizaciones criminales mexicanas, la SIEDO lo sentó de nueva cuenta para ampliar su declaración ministerial. Tenían miedo de que La Familia lo mandara a ejecutar, así que querían sacarle el mayor provecho posible.

El subteniente desertor retomó el tema de la ejecución de Nico, pero también hizo otras delaciones. Las principales, los apodos o alias de los verdaderos cabecillas de La Familia Michoacana en el Estado de México —y no precisamente Presidente Clinton ni el Comandante Enero—, y parte de la participación del licenciado José Manzur Ocaña en la delincuencia organizada mexiquense.

Comandante Enero y Presidente Clin-

ton eran los operadores. Pero “tengo conocimiento que sus jefes superiores son en primer lugar un sujeto apodado Pony y, por encima de éste, El Terry. El Terry es el número uno y Pony el número dos de la organización”.

Sobre la sinceridad de su colaboración y el alcance de su participación en La Familia y la confianza ganada en la organización, El Cóndor quiso dejar constancia: “Terry es de una edad aproximada de cincuenta y cuatro años, estatura aproximada de un metro ochenta y cinco centímetros, compleción robusta, tez morena clara, pelo quebrado negro, frente mediana, cejas semipobladas, ojos medianos café, nariz chata con base ancha, boca mediana, labios regulares, mentón oval y está cachetón. Y Pony tiene como cincuenta y dos años, mide un metro sesenta centímetros, es de compleción robusta, tez blanca, pelo lacio negro, frente mediana, cejas semipobladas, ojos medianos café oscuro, nariz recta, boca mediana, labios regulares, mentón oval y sin señas particulares”.



aunque ninguno de los dos superaba en personalidad y presencia al Presidente Clinton.

Arriba de ellos, según consta en las declaraciones ministeriales de El Cóndor, se encontraba “Papá Gordo, que opera en el estado de Tamaulipas. Es el máximo dirigente de la organización a la cual pertenezco como brazo derecho del Presidente Clinton en lo que se refiere a la administración de la empresa. Me gané ese puesto por mi buen desempeño y mis conocimientos en administración. Incluso, por algunas semanas tuve a mi cargo la nómina de la empresa”.

Papá Gordo tenía veinticinco operadores en la Plaza Toluca, “trabajando todos y cada uno de nosotros en vehículos robados, proporcionados por Comandante Enero y Presidente Clinton”. Y El Cóndor confesó un salario quincenal de ocho mil pesos cuando ascendió de jefe de informantes a cobrador de las rentas en las tiendas de droga alineadas a la empresa, “que por lo regular eran de veinticinco mil pesos a la semana y de diez mil pesos semanales para los narcomenudistas móviles”.

Pero algo no cuadraba en las rentas de La Familia en el valle de Toluca: apenas juntaban un promedio de quinientos mil pesos semanales, contra el millón que la venta de drogas le dejaba a Manzur Ocaña y a Benítez Luna a través de Los Mizraínes, según los documentos ministeriales. Por eso, a los michoacanos les urgía entrevistarse con Ahiezer. Él tenía la lista y la clave de las narcotiendas.

En los primeros días de junio, La Familia también contaba ya con nueve casas de seguridad en el valle de Toluca, que coordinaba desde la Ciudad Típica de Metepec, el municipio más rico del estado y el de mejor calidad de vida. “La primera en Quintana Roo Sur casi esquina con calzada Al Pacífico en la colonia Ocho Cedros, Toluca, una casa de dos pisos; la se-

gunda en la calzada Al Pacífico en Capultitlán, de dos pisos color blanco”, cerca de la primera porque daba a los sicarios mayor seguridad de movimiento.

La tercera se ubicaba “en Paseo Tollocan Baja Velocidad. Pasando el puente de Pilares, primer puente a la derecha a cuadra y media, en Pilares Metepec, de un piso con dos portones de color verde; la cuarta en el fraccionamiento Santa Elena, San Mateo Atenco, una casa de un piso; la quinta en Lerma, a un lado del Conalep. Era de dos pisos en color anaranjado con un portón café.

”La sexta se encontraba en La Asunción, Metepec, en la Privada de San Joaquín, la tercer casa del lado izquierdo, de un piso; la séptima en Xonacatlán, en la entrada, en donde hay un puente y una base de taxis a mano derecha, segunda calle de nuevo a mano derecha aproximadamente trescientos metros, con una entrada en común para tres casas, junto a un frontón, siendo una casa de dos pisos sin recordar el color; la octava en Villa Cuauhtémoc, apenas en la entrada principal, llegando al semáforo a mano derecha aproximadamente de doscientos a trescientos metros, en una calle de terracería y enseguida a doscientos metros más al lado derecho, una casa tipo rancho de un piso con bardas de adobe y un zaguán de madera de dos hojas, y la novena en la colonia Lázaro Cárdenas, Metepec, de dos pisos con un zaguán viejo de dos hojas de madera rústica, en una calle de terracería cerca del Conalep.”

El Cóndor también hizo una confesión que llamó la atención de los agentes federales en pleno: “Hace tres días, el martes 7 de octubre de este dos mil ocho, el Comandante Enero me contactó con un elemento de la Agencia de Seguridad Estatal [ASE], a quien no conocí por nombre ya que mi contacto con él fue a razón de que me vendió tres radios de comunicación en doce mil pesos.

”Dichos radios tienen las frecuencias de la propia Agencia de Seguridad Estatal [ASE], de la Gubernatura del Estado de México, del área de Logística, de Ayudantía, Giras y Eventos Especiales del gobernador, así como de los relámpagos (los helicópteros propiedad del gobierno estatal mexicano), que ignoro en dónde se encuentran.”

Y de El Cóndor salió la confirmación que atribuyó al Presidente Clinton el asesinato material del alcalde de Ixtapan de la Sal —Christopher Salvador Vergara Cruz, el 4 de octubre de 2008—.

Pero este último cometió un error de primer año: involucró en el crimen a su amante Érika Michel Enríquez García, en cuya estética se planeó la ejecución. Érika se encontraba entre los primeros catorce criminales capturados por agentes de la PGJEM, relacionados con el asesinato del presidente municipal, un político muy cercano a Enrique Peña Nieto.

A sus treinta y cuatro años de edad, Vergara Cruz formaba parte de la nueva generación de Golden Boys que preparaba Arturo Montiel Rojas, a la sombra del gobernador Peña Nieto y del secretario del Trabajo, Ignacio Rubí Salazar. Sin embargo, Vergara se metió en el ánimo de Peña y el 11 de enero de 2007 éste fungió como testigo de honor en la boda del alcalde con Denisse Muñoz Hernández.

Aquel año de 2007, Montiel tenía una mansión en el fraccionamiento Gran Reserva en Paseo de la Cima, y Peña mantenía una residencia en el mismo lugar pero en Paseo de la Cantera. En aquella zona desfilaban, en los campos de golf, los personajes más importantes del mundillo político estatal: de Ricardo Aguilar, presidente del PRI mexicano, a David Kornfeld, secretario del Agua; de Alfredo del Mazo Maza, hijo de Alfredo del Mazo González y actual alcalde de Huixquilucan, al empresario

inmobiliario Javier Barrios y la poderosa familia ixtapense San Román.

Preparado por la Fuerza Aérea para desempeñar labores de inteligencia militar, El Cóndor no era un eslabón oculto y aislado en La Familia, aunque él confesara a los agentes del Ministerio Público federal que apenas tenía siete meses metido en el crimen organizado cuando fue capturado, en octubre de 2008.

Hoy es catalogado como un testigo clave en las investigaciones federales para encontrar las puntas de la madeja en el tendido de las redes del narcotráfico en el Estado de México. El desertor Fernando Reyes Sánchez dio a las autoridades los nombres de al menos dos personas que estaban en la lista de condenados a muerte por La Familia, pero sobresalía un nombre sin apellidos: Esmeralda, que era una de las supuestas lideresas de los comerciantes del mercado Palmillas.

“Hemos fotografiado su domicilio particular y de su hermana en San Pablo Autopan, Toluca. La íbamos a levantar y seguramente matar por no dejarnos trabajar y cobrar muy caro el derecho de piso en dicho mercado [...], llega a cobrar hasta trescientos cincuenta mil pesos por un pedazo.”

Y confesó un crimen no registrado por las autoridades locales: “También participé en un levantón de cuatro personas del sexo masculino que se dedicaban a la venta de efedrina en el Distrito Federal, de quienes Comandante Enero consiguió su teléfono haciéndose pasar por comprador y los citó en Plaza Sendero.

”El día de la cita acudimos a bordo de una camioneta Mazda CX9 blanca, robada. Íbamos Comandante Enero, Cuco y Chiquilín. En el Volkswagen Passat gris llegaron cuatro personas del Distrito Federal, todos ellos socios. Para cerrar el trato los trasladamos a nuestra casa de seguridad en la colonia Lázaro Cárdenas de Metepec, donde los levantamos.

”Pasaron el resto de la tarde y la noche en ese lugar. Al día siguiente, como a las tres de la mañana, los trasladaron a Tejupilco en dos camionetas, la Mazda CX9 y otra Mazada pero CX7 color gris, en donde fueron entregados a otro grupo armado de la misma organización.

Entregada la mercancía, regresamos de inmediato a Toluca. El Passat se quedó

unos días en la casa de seguridad de la colonia Lázaro Cárdenas.”

Entre palabra y palabra, porque no lo querían callado, el 11 de octubre de 2008 Fernando Reyes Sánchez repitió lo mismo en declaraciones ministeriales que rindió ante el agente del Ministerio Público del fuero común de la PGJEM, que ante los investigadores federales de la SIEDO en el Distrito Federal: “El delegado de la Procuraduría General de la República de apellido Manzur tenía más de quince tienditas de distribución de drogas en la ciudad de Toluca, y en los municipios aledaños.

”Manzur con los hermanos Misraín [Mizraím] y Aisier [Ahiezer] controlaban la venta y distribución de droga, en concreto cocaína, pero en mayo de 2008 el Presidente Clinton concretó la compra de la Plaza Toluca a Manzur”, aunque, para mantener las apariencias, el mismo Manzur coordinó operativos especiales para reventar algunas de las tiendas cuando pasaron al control de La Familia, según las delaciones de El Cóndor.

Después de la entrega de Ahiezer nadie estaba a salvo. Aunque en principio se dio como un enfrentamiento, a la seis de la tarde del jueves 3 de diciembre de 2009, un comando atacó con granadas de fragmentación y ráfagas de rifles de asalto la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN) de Coyuca de Catalán.

El ataque tenía un objetivo: El Costeño Alfonso Benítez Luna, agente del Ministerio Público federal, quien murió en ese lugar. También falleció Armando Mota Cortés, comandante de la policía ministerial federal. Dos agentes estatales resultaron heridos de gravedad.

Minutos más tarde, en un enfrentamiento en la comunidad de Las Cruces, cayeron muertos dos de los criminales que atacaron la sede de la UMAN y el policía estatal José Cortés Molina.

Tras la caída de Manzur Ocaña, Benítez Luna fue sacado de Toluca y al menos en dos ocasiones la PGR ordenó su traslado, pero hasta Guerrero lo fueron a cazar. En esta última entidad, Benítez Luna buscaba un abogado defensor porque le habían entregado informes confidenciales sobre las investigaciones de la SIEDO contra su ex jefe Manzur Ocaña.

El 27 de junio de 2008, Ahiezer también exhibió y entregó al Ministerio Público una hoja con fotografías y nombres de algunos de los agentes de la policía ministerial del Estado de México que recibían una parte de las rentas por permitir la distribución de droga en el valle de

Toluca y proteger a los dealers. En las declaraciones de la averiguación previa destacan los nombres de Javier García Carrasco, Ángel García Cervantes, Luis Alberto Huerta Galván, Rafael Gil Salgado y Samuel Rojas Gutiérrez.

En sus negociaciones telefónicas con los secuestradores, Ahiezer todavía confesó una última conversación con Manzur Ocaña: “La verdad, ese licenciado es un cabrón. Nada más va por la feria. Y, de huevos... si yo cuánto dinero no le entregué. Le pedí el favor, que me hiciera el favor de hablar con ustedes, al que le vendió la plaza, al jefe de ustedes”. Pero el licenciado Manzur Ocaña José abandonó a sus viejos socios.

Mizraím nunca volvió. El jueves 26 de junio de 2008, cinco días después del secuestro y de las apuradas negociaciones de su hermano, ya estaba muerto. Ahiezer se presentó ese día en el cuartel general de la SIEDO, hizo la denuncia por el levantón, se acogió al programa de testigos protegidos y habló. Poco menos de dos meses después, la noche del 20 de agosto, él también estaba muerto, y nadie sabe con certeza quién lo mandó matar.

*

Los principales socios, testigos y delincuentes que podían testificar contra el prófugo ex delegado Manzur Ocaña, aportar datos precisos sobre las cantidades que se recibía de los cárteles de la droga, la piratería, las extorsiones o cobro de seguridad y otros delitos conexos del fuero común y delincuencia organizada, además de cómo se levantaba el narcoimperio mexiquense, están muertos. Poco a poco los han eliminado.

Además de Ahiezer, Mizraím y Benítez Luna, fueron ejecutados Milton Guerrero Cristóbal (jefe Regional de la AFI) y Pedro Felipe Magaña Vázquez (titular del área de Control y Supervisión Operativa de la AFI); Braulio Nicolás Hernández Zúñiga (agente de la PGJEM), y Arturo Cuitláhuac Ortiz Lugo (primo de Peña). En 2009 también desapareció el narcomenudista Jumar Maldonado Mondragón. **NT**

Tres tesis sobre el caso Narvarte y una lección escarmentada

** Documentar el infierno en Veracruz involucra pisar los talones del binomio crimen-institucionalidad. En esa entidad bañada en sangre, la delincuencia organizada de Estado arrolla a todo aquel que intenta interferir o denunciar el maridaje de la criminalidad y las instituciones.*



El pasado 31 de julio se cumplieron dos años del multihomicidio de cinco personas en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, y en el que perdieron la vida Rubén Espinosa (periodista), Nadia Vera (activista estudiantil), Alejandra Negrete, Mile Viriginia Martin y Yesenia Quiroz. El artero crimen –que es uno de los episodios que toca las fibras más sensibles de la crisis nacional– permanece sin castigo. De hecho, en mayo del año en curso, jueces federales congelaron los procesos contra dos de los tres detenidos. Y las averiguaciones continúan envueltas en una bruma de omisiones e inacciones (como todos los otros centenares de crímenes de lesa humanidad que laceran al país). Las líneas de investigación que involucran la labor periodística de Rubén y el activismo de Nadia Vera en Veracruz siguen desatendidas. Recientemente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reportó que la Procuraduría de Justicia de la capital “contaminó” la escena del crimen, e ilegalmente filtró información a la prensa que revictimizó-criminalizó a las víctimas del asesinato múltiple. Esto con el objeto de urdir un relato que desautorice el reclamo de justicia de los deudos, el gremio periodístico y el movimiento estudiantil. Antes de morir, Rubén y Nadia responsabilizaron públicamente al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (admirador confeso de Francisco Franco), por cualquier perjuicio que pudieran sufrir. Unos días antes de su asesina-

to, Rubén confesó: “Me molesta, me caga estar así, aislado, con miedo, no poder chambear a gusto, pero en Veracruz no se pueden echar en saco roto las intimidaciones, los acosos y la vulnerabilidad en la que periodistas ejercen el oficio” (Noé Zavaleta en “El Infierno de Javier Duarte”). Todas las evidencias del crimen apuntan al Palacio de Gobierno en la ciudad de Xalapa (capital de Veracruz). Y, sin embargo –o acaso por eso– todas las indagatorias desestiman la “línea Veracruz”.

Con base en las evidencias disponibles, y las averiguaciones de organismos autónomos como Artículo 19, periodistas independientes, abogados de las víctimas, y algunos rumores palaciegos, es posible perfilar tres tesis acerca del multihomicidio.

Primera tesis: venganza personal

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y su secretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez Zurita, habían sido expuestos públicamente por el lente denunciatorio del fotoperiodista Rubén Espinosa.

En más de una oportunidad, las imágenes en prensa de Javier Duarte, capturadas por Rubén Espinosa, retrataron a una persona obcecada por “la plenitud del pinche poder” (dixit Fidel Herrera Beltrán). El registro fotográfico de un Duarte colérico, con mirada inequívoca-

mente homicida, es crédito de Rubén. Por ese goteo de información que los poderosos aborrecen, se hizo de conocimiento público el malestar que generó intramuros el lente de Rubén. Esas fotos circularon febrilmente en la prensa nacional e internacional. Y, en cierto sentido, la certidumbre pública acerca del talante criminoso de Javier Duarte es un mérito del trabajo de Espinosa.

Por otro lado, Rubén Espinosa nunca titubeó cuando denunció ante la prensa que la fuente de acoso e intimidación que sufrían los periodistas-activistas en Veracruz era la secretaría de seguridad pública, dirigida por el “Mad Dog” tropical, Arturo Bermúdez Zurita, también conocido en los corrillos de la narcocracia como “Capitán Tormenta”.

Esos “desaires” y señalamientos inflamaron el rencor vengativo y homicida de una casta gobernante que instauró en el estado un orden puramente delincuencial.

Segunda tesis: miedo

Documentar el infierno en Veracruz involucra pisar los talones del binomio crimen-institucionalidad. En esa entidad bañada en sangre, la delincuencia organizada de Estado arrolla a todo aquel que intenta interferir o denunciar el maridaje de la criminalidad y las instituciones.

El 5 de junio de 2015, ocho alumnos de la Universidad Veracruzana fueron atacados brutalmente por un comando armado en la ciudad de Xalapa, y cuya acción emuló peligrosamente el modus operandi de la represión en Ayotzinapa (aunque sin desaparecidos). El asalto dejó algunos rostros desfigurados, traumatismos craneoencefálicos, fracturas múltiples y un clima de horror.

En México es imposible distinguir una acción criminal de una acción de gobierno. Y lo que ese grupo de estudiantes denunció antes del ataque fue justamente el creciente ensamblaje del estamento gobernante con los cárteles de la droga. “La neta, la neta, ustedes son los Zetas” (en referencia a la organización criminal cuya sede residencial-operativa es Veracruz). Esa consigna repicó en cada marcha que los estudiantes organizaron para reprochar el terrorismo criminal del gobierno de Javier Duarte y el sobreempoderamiento de sus allegados criminales.

Rubén Espinosa documentó la agresión a los estudiantes. Y, convencido que “los agresores despechan en Palacio de Gobierno” (Alejandro Saldaña), dispuso investigar a fondo el caso. Esa osadía le costó el exilio. Rubén salió huyendo de Veracruz por el virulento asedio del gobierno duartista. Pero no desistió de seguir con la investigación del ataque sicarial contra los ocho jóvenes. Desde la Ciudad de México —otrora santuario de periodistas en destierro— solicitó ayuda a colegas veracruzanos para difundir un documento que escribió a cuenta personal, y cuyo contenido arrojaba pistas sobre la conexión de aquel escuadrón criminal con el gobierno del estado de Veracruz.

El gobierno sabía de la tenacidad de Rubén Espinosa. Y temía que el fotorreportero desentrañara la verdad: que en Veracruz la institución duerme con el enemigo. En otras palabras, que la gobernabilidad en esa entidad está terminantemente fuera de la legalidad.

El duartismo tenía miedo de Rubén, en particular, y de la denuncia social en general. Porque no hay gobierno que soporte la verdad que él y otros conocen: que la delincuencia (narcotráfico) es clase gobernante.

Tercera tesis: represión ejemplar

La articulación del periodismo crítico e independiente y el movimiento estudiantil veracruzano comenzó a tener un costo político

para el Partido Revolucionario Institucional. En la elección federal de 2015, el 7 de junio de ese año —sólo dos días después de la atroz embestida a los estudiantes—, el partido oficialista perdió escaños tradicionalmente indisputados en el Congreso de la Unión; particularmente la diputación de la capital del estado. En esa ocasión fue electo Cuitláhuac García, del Movimiento de Regeneración Nacional (oposición), como diputado federal por el Distrito electoral federal 10 de Veracruz con cabecera en Xalapa-Enríquez a la LXIII Legislatura, y tras derrotar a Reynaldo Escobar, fiel e histórico militante del PRI que desde distintos cargos coordinó la instalación de la delincuencia organizada en el estado. En 2016, el propio Cuitláhuac García disputó la gubernatura del estado. Y perdió por un margen minúsculo (en una elección fuertemente cuestionada por anomalías desentendidas por el árbitro electoral). Si el movimiento estudiantil hubiera seguido en pie, es posible especular que la oposición habría conquistado la gubernatura.

El asesinato de Rubén Espinosa y Nadia Vera en la colonia Narvarte de la Ciudad de México aconteció sólo dos meses después del primer gran descalabro electoral del PRI estatal (una entidad que “el partido” gobernó ininterrumpidamente por casi un siglo). Rubén y Nadia fueron figuras emblemáticas de esa “articulación del periodismo crítico e independiente y el movimiento estudiantil veracruzano”. Por eso sufrieron acoso sistemático. Y eso explica que decidieran salir huyendo de Veracruz. Pero la violencia homicida los alcanzó en su fallido refugio. Y fue de tal dimensión la desmoralización por el multihomicidio, que la protesta social agonizó en ese estado. Julián Ramírez alerta: “después del asesinato en la Narvarte, el movimiento de estudiantes en Veracruz se acabó”. La represión fue ejemplar. Escrupulosamente dirigida. El mensaje fue claro: no se tolerará ni un connato de crítica al orden criminal, y el brazo de venganza veracruzano no conoce fronteras geográficas. **NT**

A Rubén y Nadia les asistía la razón cuando advertían: “nos están aniquilando”. *El Estado Mexicano nos está aniquilando.*

* Fuente: <http://lavoznet.blogspot.com.ar/2017/08/3-tesis-sobre-el-caso-narvarte-y-una.html>

* *Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.*

Plazas irregulares

* Sus pasos inseguros denotaban angustia, su gran estatura no fue suficiente para vencer sus miedos, el escenario preparado para la ocasión lo intimidó mucho. Cuando le extendieron el fólter no atinaba a recibirlo y tampoco extendió su mano para agradecer, como lo hicieron sus compañeros. Sin embargo, continuó su trayecto hasta el final de ese presidium donde ya no había nadie.

Luis Zamora Calzada

Toluca, México; 9 de agosto del 2017. Hace un mes se hacía referencia a las plazas docentes irregulares denunciadas en la delegación administrativa de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, a cargo de Luis Ignacio Sierra Villa, actualmente con plaza de investigador educativo en permiso y otras dos plazas asignadas contrarias a derecho —desde lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente—, una a favor de su hijo y otra para un supuesto compadre.

Desde esa fecha se ha solicitado una reunión con la actual titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, Elizabeth Vilchis Pérez, con licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, con el propósito, entre otros, de hacer entrega de un legajo de Formatos Únicos de Movimiento de personal (FUM) que han dejado al descubierto el abuso y la ilegalidad en el manejo de plazas, al menos en esa delegación administrativa.

A pesar de ello y fieles a la costumbre de esa instancia gubernativa —al igual que la mayoría de las dependencias estatales del sexenio que termina—, la negativa para otorgar audiencias es una constante, el personal que allí labora parece especializada en crear pretextos para evitar las entrevistas con sus jefes, apegados a una especie de autismo gubernativo que en nada ha beneficiado al gobierno de Eruviel Ávila, caracterizada por no escuchar, independientemente de la soberbia manifiesta en bastantes titulares a días de empacar sus pertenencias, para desocupar las oficinas que le fueron prestadas temporalmente.

Ante esta falta de tacto político y apegado al compromiso de dar a conocer más plazas otorgadas a recomendados —tomando como base los documentos que hasta ahora nos han hecho llegar—, se dan a conocer más formatos FUM:

En folio 505585823 de fecha 13 de febrero de 2015, se otorgó una plaza de profesor titulado indeterminado, asignado al centro de trabajo E300010324, con la que ingresó a partir del primero del mismo mes y año a prestar sus servicios al gobierno estatal, el licenciado en derecho Héctor García Romero, con domicilio en Tenancingo y nacido el 8 de agosto de 1985. Quizá las irregularidades no fueran tan notorias de no ser por la cantidad de ascensos en plazas y salario de esta persona, a quien el 12 de diciembre de 2016 le asignaron un interinato de "pedagogo A", a partir del primero de

septiembre de ese año al veintiocho de febrero de 2017 como consta en folio 606006704; sin haber concluido ese nombramiento, le asignaron a partir del 16 de febrero al 15 de mayo de este año otro interinato, ahora de "investigador educativo" mejorándolo salarialmente, por supuesto, en folio 705007120 del 14 de febrero de 2017. En el colmo de las incongruencias le otorgaron una plaza de coordinador de promotores, con salario equivalente a la plaza de supervisor escolar, en un periodo comprendido del 16 de marzo al 15 de agosto de 2017, lo que puede implicar que haya cobrado dos plazas en marzo, abril y parte de mayo.

También de Tenancingo, Yari Guadalupe Flores Serrano fue dada de alta en el gobierno estatal el 16 de enero de 2016, con una plaza de profesor titulado indeterminado, en folio 605662203 del 2 de febrero del año pasado y en folio 605662192 de la misma fecha le asignaron una segunda plaza indeterminada en la misma categoría, haciendo notar que en el apartado de escolaridad, se limitan a señalar otra edu sup, sin constar la preparación profesional, lo que queda claro es el uso de otra plaza docente para el mismo centro de trabajo E300010324.

Se asegura que esta persona es prima de una influyente de nombre Xóchitl Yaneth, quien al parecer también apoyó a su cuñado y, se asegura, son parte del llamado Grupo Tenancingo.

Lo anterior no tiene punto de comparación con las penurias que pasa un egresado de cualquier escuela normal, obligado a presentar el examen de ingreso o de oposición para obtener un empleo temporal, por las actuaciones que realiza la Secretaría de Educación y la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente.

Hay más plazas otorgadas a recomendados en condiciones parecidas, que por razones de espacio se darán a conocer en entregas posteriores y ante la cerrazón de la Secretaría de Educación estatal por otorgar una audiencia.

Necesidades educativas especiales

El maestro de ceremonias se esmeraba en la emotiva lectura de los nombres de los alumnos. Al escuchar el suyo, cada uno iba pasando al presidium para recibir su certificado de sexto grado de educación primaria. Era su último pase de lista en esa escuela, en la que habían estado seis años con diferentes maestros en los grados escolares.

"Juan González Miguel, Claudia Hernández Crisanto, Margarita Ramírez Avilés", leía el maestro.

Al subir los estudiantes al estrado, los aplausos no se hacían esperar. Eran de sus familiares y compañeros de salón y la emoción brotaba de las miradas de los padres de familia. Las porras para los alumnos más populares de la escuela corrían a cargo de sus compañeros, era un día de fiesta casi para todos, hasta que llegó el turno de Luis Felipe.

Él no avanzó como todos. Un profesor lo tomó del brazo para llevarlo al lugar donde recibiría su documento. Y es que tenía problemas para escuchar, no había oído su nombre, tampoco percibió los aplausos porque no los hubo, mucho menos una porra, su "martirio" en la escuela primaria llegaba a su fin, sus padres no estaban en ese lugar, únicamente su abuelita, una señora ya entrada en años le acompañaba.

Sus pasos inseguros denotaban angustia, su gran estatura no fue suficiente para vencer sus miedos, el escenario preparado para la ocasión lo intimidó mucho. Cuando le extendieron el fólter no atinaba a recibirlo y tampoco extendió su mano para agradecer, como lo hicieron sus compañeros. Sin embargo, continuó su trayecto hasta el final de ese presidium donde ya no había nadie y era, simbólicamente, el final de sus años en la primaria.

Luis Felipe presentaba problemas de lenguaje y, según los diagnósticos que la escuela le hizo, también tenía lenta retención. Algunos de sus compañeros murmuraron que él no sabía leer ni había aprendido los contenidos que imparte la escuela. De hecho, su maestra de sexto casi no le hacía caso y terminó la primaria de milagro, aseguraron algunos.

El año escolar que terminaba fue particularmente difícil. Se asegura que su profesora ya no lo toleraba porque "no hacía ningún trabajo, muy de vez en cuando ponía atención en algún texto de los libros, no se sabe las operaciones aritméticas; cuando estás con él y le haces una narración, si le preguntas qué fue lo que pasó al inicio, no recuerda nada, todo se le olvida, quizá por esta razón sus compañeros no lo aceptaban en los equipos de trabajo y regularmente lo mantenían aislado. Así fue la mayor parte del tiempo de primero a sexto...", dijo quien fue su maestra en tercer grado. **NT**



Alumno de la UAEM, entre los 10 mejores de concurso internacional de Microsoft

* Al colocarse en el top ten del Microsoft Office Specialist World Championship 2017, Samuel Ruiz Pérez, estudiante de Prepa 1, dio cuenta de la pertinencia y actualidad de la educación que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de México.

Toluca, México; 9 de agosto de 2017. Samuel Ruiz Pérez, estudiante del tercer semestre del plantel "Lic. Adolfo López Mateos" de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México, se ubicó en el top ten del Microsoft Office Specialist World Championship 2017, que se llevó a cabo en Anaheim, California, y en el que participaron jóvenes de 156 países.

El destacado alumno de la Autónoma mexiquense, que formó parte del representativo de nuestro país en esta competencia mundial, conformado por seis jóvenes, y único mexicano que compitió en la Categoría Word 2013, detalló que concluyó su prueba en 20 minutos, de un total de 50 minutos establecidos en las reglas del certamen.

En entrevista, el estudiante universitario expresó que para obtener buenos resultados durante la competencia, que consiste en la realización de proyectos en el menor tiempo posible y logrando completar y ordenar la información solicitada, se requiere un pleno dominio de la aplicación, comprensión de los textos e instrucciones, pero también la habilidad de responder ante la presión del tiempo.

A nivel personal y profesional, dijo, la participación en esta competencia mundial representa avanzar en el conocimiento de Word, que le permite un uso pleno de esta herramienta en sus actividades escolares y amplía sus posibilidades para ingresar al campo laboral, ya que para concursar desde el nivel regional, se requiere de la certificación por parte de la empresa Microsoft, que avala dicho dominio.

Por su parte, la jefa del Departamento de Capacitación de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UAEM, Martha Matadamas Gómez, quien prepara a los jóvenes que participan en este tipo de competencias, puntualizó que el lugar logrado por Samuel Ruiz representa un gran logro para la institución, ya que se ubicó por encima de jóvenes de Taiwán y Hong Kong, quienes usualmente destacan en este tipo de certámenes.

Luego de manifestar que para participar en estos certámenes, es necesario que los alumnos adquieran, en el ámbito académico y personal, la disciplina que demanda la excelencia, Matadamas Gómez sostuvo que esta también es una experiencia de vida para los jóvenes, quienes pueden demostrar su talento en escenarios de talla internacional, con base en la educación integral que les ofrece la UAEM.

